

1. Desde la firma del tratado de Ayuda Mutua con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la influencia sobre los institutos militares chilenos fue creciente. Desde comienzos de la década de los 60, periodistas y partidos políticos de izquierda denunciaron estos hechos, haciéndose notable la campaña a partir de 1968, en que revistas como «Causa ML» (números 2 y 3 de ese año; y 7 y 10 de 1969) dieron a conocer copias fotostáticas de los textos utilizados en las diversas escuelas militares chilenas, que eran simples traducciones de los textos utilizados por el Ejército de EE.UU. Durante 1970 y 1971, la revista «Punto Final» denunció programas de cursos de anticomunismo en la Escuela Militar Bernardo O'Higgins y en la Academia Naval de Playa Ancha, en Valparaíso. En 1972, los diarios «El Pueblo» y «El Rebelde», ambos de Santiago, denunciaron la presencia de miembros de la Misión Militar Norteamericana como «profesores invitados» de año completo en esas mismas academias militares. Esto, por supuesto, no es extraño a la *filosofía* del Pacto de Ayuda Militar (PAM). Las mismas fuentes anteriores citaban los siguientes hechos:

«En 1963, el Departamento de Defensa de los EE.UU. explicó en un documento al Congreso de su país, la filosofía del Pacto de Ayuda Militar en su relación con los Ejércitos latinoamericanos: El PAM también contribuye a los objetivos políticos de los Estados Unidos a través de sus programas de entrenamiento que traen a este país muchos líderes militares extranjeros... pues no sólo sirve para mejorar la capacidad técnica del personal militar, sino también para exponerlos a los *requerimientos de un responsable liderazgo militar en una sociedad contemporánea*».

«El 3 de junio de 1969, el secretario de Defensa yanqui, Melvin R. Laird, dijo ante el Congreso de su país: "...aseguro que el PAM hará cuanto pueda para asegurar que todo dólar invertido en ayuda donada tendrá su más efectivo uso en apoyo de la política y la seguridad de los Estados Unidos".»

«En 1963, el secretario de Defensa, Robert McNamara, dijo ante el Senado norteamericano: "La asistencia militar y la económica están frecuentemente unidas en apoyo a los objetivos de los Estados Unidos, con Fuerzas Armadas nativas provistas por el programa de asistencia militar con instructores avezados y la Agencia para el Desarrollo Internacional aportando los elementos materiales... lo cual disminuye la vulnerabilidad de la población nativa hacia las lisonjas y amenazas de los agentes comunistas, comprometidos en el fomento de la insurrección".»

«En el año 1964, ante la misma Cámara de Representantes, el general Robert J. Wood, que era director de Asistencia Militar del Departamento de Defensa, dijo: "Hay en ejecución un Programa de Seguridad para la Alianza para el Progreso... que tiene como objetivo fundamental un liderazgo militar latinoamericano".»

Para profundizar este tema, ver *Estados Unidos y el nuevo equilibrio en América Latina*, de James Petras, «Revista de Estudios Internacionales», Santiago Chile, enero-marzo de 1969 pp. 490 y 518.

2. Las palabras entre comillas son una reconstrucción aproximada de lo dicho por los oficiales norteamericanos asesores de la conspiración que desembocó en septiembre de 1973, y se hace en base a los discursos, arengas y reuniones en buques de la Armada y centros militares hechas por oficiales golpistas a partir de mayo de 1973. Como se denunció en los primeros diez días de septiembre, en los diarios «Puro Chile», «Ultima Hora» y revista «Chile Hoy», los oficiales golpistas que aren-

gaban desembozadamente a los marinos y aviadores principalmente, y que afirmaban su posición en que «los americanos nos apoyan y nos han dicho tal y tal cosa», son los siguientes: coronel Juan Soler Manfredini, director de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea; coronel Carlos Ottone Mestre, director de la Escuela de Aviación Capitán Avalos; el teniente segundo Jaime Olavarrieta, de la Escuela de Grumetes en Isla Quiriquina; el teniente Julio Meneses, del Hospital Naval de Valparaíso; el capitán de fragata Alberto Vázquez, comandante de la Base Aeronaval de El Bolloto; el capitán de fragata Martiniano Parra, de la Base Naval de Talcahuano; comandante César Guevara Fuentes, del Grupo 7 El Bosque, de la Fuerza Aérea en Santiago, y su segundo comandante Ivan Doren, así como sus ayudantes el teniente Ernesto González y cabo Florencio Gálvez. Uno de los oficiales que más facilidad de palabra tenía en los últimos meses antes del golpe para señalar que «los americanos nos apoyan y nos dan asesoría técnica en todo», y contar detalles de las reuniones con los representantes del ejército de EE.UU. a partir de noviembre de 1972 para planificar el derrocamiento de Salvador Allende, era el coronel de aviación Ramón Gallegos Alonso, que fuera jefe de relaciones públicas de la Fuerza Aérea de Chile hasta agosto de 1973, y brazo derecho de la conspiración del ex comandante en jefe César Ruiz Danyau en la segunda quincena de ese mismo mes, junto con los oficiales Juan Pablo Rojas, Guillermo Navarro Vicencio, Raúl Vargas y Antonio Quirós, en Santiago. En Antofagasta, norte de Chilé, el comandante de escuadrilla Juan Cvitanic, jefe de relaciones públicas de la Base de Cerro Moreno, era otro de los que contaban a sus amigos y trataba de hacer propaganda al golpe relatando detalles «del apoyo americano». También el comandante de grupo de Antofagasta, Patricio Araya Ugalde, a quien llamaban «el otro yo del general Ruiz Danyau». En el Grupo 10 de Los Cerrillos estaban Germán Fuchslocher y Carlos Álvarez, y en el Grupo 2 de Quintero (cerca de Santiago), el comandante de grupo Pablo Saldías Maripangue.

La gran mayoría de la información sobre las reuniones de oficiales chilenos con oficiales norteamericanos, a partir de noviembre de 1972, provienen de este tipo de infidencias, cuando, al parecer, los conspiradores se encontraban absolutamente seguros de que nada podría detener su maquinaria golpista. Por supuesto, hay otros tipos de fuentes también para conocer lo que pasaba en el interior del grupo conspirativo, realmente muy numeroso. Pero esas fuentes, por ahora, no se pueden citar, porque pondría en peligro las vidas de muchos chilenos, tanto civiles como militares, que siguen dentro de Chile en la fecha de publicación de este libro.

3. En estas elecciones parlamentarias, la Unidad Popular sacó casi el 44 % de la votación, lo cual, para el sistema político chileno era un verdadero triunfo, ya que ningún Gobierno chileno elegido democráticamente había logrado subir su porcentaje de votación con respecto al sacado al momento de su elección presidencial. Un caso ilustrativo era el de Eduardo Frei: fue elegido en 1964 con el 56,0 % de los votos; en 1965, para las elecciones parlamentarias, ese porcentaje bajó a 42,3 %; tres años más tarde, su Gobierno sacó en las elecciones municipales de 1967 el 35,58 %; y en las parlamentarias de 1969, el 21,8 %. Para el sistema pluralista democrático existente en Chile hasta el 11 de septiembre de 1973, esta minoría relativa no era señal de ilegitimidad, sino simplemente de medida de apoyo o rechazo político a una gestión constitucional. Del mismo modo, en las elecciones presidenciales de 1958, el candidato triunfante, Jorge Alessandri Rodríguez sacó sólo el 31,2 %; pero era mayor cantidad que el segundo, Salvador Allende, con 28,5 %; el tercero, Eduardo Frei, con 20,5 %; y el cuarto, el radical Luis Bossay, con 15,4 %. Sin embargo, nadie cuestionó la legitimidad de la presidencia de Jorge Alessandri.

En cambio, el Gobierno de la Unidad Popular había hecho un camino al revés: de 36 % de los votos en 1970 había llegado al 44 % en 1973, lo cual mejoraba su posición relativa en el sistema pluralista democrático. Sin embargo, los conspiradores daban como «prueba» de la ilegitimidad del Gobierno de Allende que «sólo representaba a una minoría del 36 %», lo cual es un argumento falaz en el sistema político de Chile.

4. La versión de lo que ocurrió en esta reunión se conoció por boca del propio presidente Allende, quien habló con un grupo reducido de periodistas de la Unidad Popular, en la propia Moneda, en la noche del mismo día 8 de agosto. Infortu-

nadamente, no estoy en situación de decir los nombres de esos periodistas, porque todavía están en Chile, algunos presos y otros en la clandestinidad. Y uno asesinado, como es el caso de Augusto Olivares Becerra.

5. La existencia de la cinta magnética, un sumario de su contenido y una versión de esta reunión, también fue dada por Allende a un grúppo reducido de periodistas de la Unidad Popular para fundamentar su petición de no informar sobre estos sucesos ya que la situación estaba «extremadamente crítica». Los sucesos del día siguiente fueron casi públicos, incluso con arengas en los patios de las bases aéreas involucradas, con salidas y entradas de correos militares fáciles de identificar. Pero se respetó el acuerdo con Allende y los diarios de izquierda no informaron del hecho, en sus detalles, sino en general y de manera indirecta. Los periodistas de derecha callaron totalmente.

6. Durante la campaña presidencial, en 1970, muchos periodistas acompañaron día y noche, por sus viajes por todo Chile, a Salvador Allende, y al final de la jornada, en diversas ocasiones se planteó el problema de qué harían las Fuerzas Armadas si la Unidad Popular ganaba. Desde entonces, se supo por boca de Allende que «por lo menos tengo un general amigo, que es Torres de la Cruz». Y lo definía el propio Allende como «allendista». Incluso llegó a decir que su quinta antigüedad en el Ejército en la época (la lista era Schneider, Prats, Pinochet, Urbina, Torres de la Cruz, Bonillas) daba garantías suficientes. Más tarde, después de los sucesos de octubre de 1970, Torres de la Cruz volvió a ser citado por los asesores del Presidente en problemas militares como «leal». Cuando a partir de marzo-abril de 1973 comenzaron a ocurrir los allanamientos militares a las fábricas, funcionarios responsables de la Unidad Popular fueron a hablar con Torres de la Cruz en Punta Arenas (donde Allende lo había nombrado Intendente para «reforzar» la lucha contra el contrabando de armas de los grupos fascistas civiles desde Argentina), a fin de conocer qué pasaba en el seno del Ejército. Por supuesto, Torres de la Cruz informó que éstos eran excesos propios del tipo de operación que significaban los allanamientos (la brutalidad, castigo a las obreras y obreros, etcétera).

7. El caso de Augusto Pinochet en el drama que vive Chile es muy particular. Hoy, en 1974, aparece como el jefe más cruel de una Junta Militar fascista. Y sin embargo, en 1973, hasta junio de ese año, los generales conspiradores dudaban mucho de Pinochet, sobre todo porque siempre se mostró partidario de la línea seguida por el comandante en jefe de la época, Carlos Prats, y porque muchos de los cursos de Estado Mayor que dictó se daban bajo el lema impuesto por Prats de «defensa de la constitucionalidad en caso de amotinamiento militar». El general Pinochet fue el último eslabón en cerrarse (en realidad, el general Mendoza fue informado más tarde, pero su importancia no es comparable con la de Pinochet), y la razón fundamental que dieron los generales Leigh, Bonilla, Brady y Arellano y el almirante Merino para «invitarlo» a ser jefe de la Junta, fue que con ello se impedían fracturas en el Ejército. Tal vez esta realidad de Pinochet, de ser ajeno por tanto tiempo al grupo conspirador, lo mantuvo fuera también del plan para asesinar a Allende. La participación de Mendoza en el plan de asesinato se justifica, porque desde 1971, había demostrado una aversión casi enfermiza a la Unidad Popular, llegando incluso a retardar la entrada de Carabineros para despegar las calles en la capital en las manifestaciones de oposición. Mendoza, en realidad, era conocido públicamente como «enemigo de la Unidad Popular» desde el comienzo del período de Allende.